

## **Proceso constituyente en Chile: Reflexiones y tensiones vinculadas al reconocimiento, representación y participación política de los pueblos indígenas**

Eduardo Alen Tripailaf Raimilla

Licenciado en Educación, UCT, Chile.

Magíster en Educación, UAHC, Chile.

Magíster en Estudios culturales latinoamericanos, PUJ, Colombia.

Investigador independiente

[etripailaf.raimilla@gmail.com](mailto:etripailaf.raimilla@gmail.com)

### **Introducción**

La historia reciente de Chile reactivó la memoria de las diversas luchas sociales y políticas que han llevado al país en estos últimos años a invertir esfuerzos por alcanzar un acuerdo nacional que permita trabajar y dar soluciones a las profundas injusticias y desigualdades que sus diversas comunidades identifican. En este contexto, el proceso constituyente del 2022 entendido en lo colectivo como una apuesta amplia y popular movilizó a grandes masas que obligaron a re-pensar en lo político asuntos como el reconocimiento, representación y participación de múltiples colectividades. Destacando por primera vez en la historia una discusión que desde hace años circula en el territorio, vinculada con el lugar que ocupan sus pueblos indígenas.

Por ello, el proceso constitucional del 2022 en Chile marcó un hito en las posibilidades de generar un nuevo acuerdo nacional que permitiera poner en discusión problemáticas que la ciudadanía consideraba necesarias de atender para superar injusticias y desigualdades que históricamente afectaban sus vidas en lo cotidiano. Asimismo, abrió la posibilidad de que actores silenciados durante décadas de participación y toma de decisiones en el poder pudieran asumir un papel protagónico en la construcción de una nueva propuesta, como son los pueblos indígenas.

A partir del proceso del plebiscito constitucional del 2022 en Chile, en esta ponencia se explora cómo los escaños reservados para los pueblos indígenas permitieron construir nuevas perspectivas sobre lo político, la participación ciudadana y las necesidades que existen en el país en materia de derechos personales y colectivos de las diversas etnias del territorio.

Para ello, se presentan antecedentes claves vinculados con la conformación de la convención constitucional, sus aportes en la construcción de normativas que reconocían explícitamente el lugar de las comunidades indígenas del país y sus potencialidades para poder observar asuntos que dialogan con la realidad latinoamericana de los diversos grupos étnicos. Para profundizar en las reflexiones, presento una breve aproximación a las normativas fruto de la discusión levantada en la convención constitucional del 2022, acompañada de los análisis e implicancias de estos asuntos en términos culturales y sociales.

### **Punto de partida: El estallido social y el surgimiento de nuevos actores políticos**

Para rastrear el fenómeno es imposible no hacer alusión al estallido social de Chile el 18 de octubre del 2019, a partir de esta fecha diversos movimientos, activismos y organizaciones de la sociedad civil comenzaron a exponer sus demandas, necesidad de reconocimiento y malestares respecto a fenómenos como la desigualdad, injusticia y abusos de poder reiterados propio de un sistema político-económico que se desbordaba.

Autores como Jiménez (2020) plantean que esta emergencia de nuevos actores que en tiempos pasados no habían irrumpido públicamente en la escena política buscaban un objetivo común, que era la reformulación del modelo que Chile seguía en términos económicos y sociales, con la aspiración de mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas, tantos años silenciadas y esperando promesas que nunca se materializaron desde la entrada la democracia en 1990 luego de la dictadura militar. Dentro de las consignas estuvo muy latente, *Chile despertó y no son 30 pesos, son 30 años*, aludiendo al aumento de las tarifas de transporte público que se han instalado como el origen de esta protesta.

En el caso de los pueblos indígenas, este fenómeno proporcionó un nuevo espacio para su participación política, la que luego se formalizó en los acuerdos generados para la escritura de una nueva constitución, determinando que su elaboración requería de escaños reservados

de todas las etnias del territorio. Como bien advierten Fuentes y De Cea (2017), en Chile históricamente ha existido un reconocimiento débil de los pueblos indígenas condicionado a la defensa de la identidad nacional y la soberanía. Por lo que ideas como lo intercultural, la autonomía y la autodeterminación en este panorama recién adquirirían posibilidades de ser construidas en el marco jurídico interno, proporcionando a estos grupos un espacio de poder y representatividad permanente en el territorio.

Dentro de las razones que impulsaron levantar un proceso constituyente pluralista y que integre explícitamente a representantes de las diversas etnias, estaba subsanar una deuda histórica de reconocimiento y participación (Acevedo, 2021). Puesto que, pese a que en Chile desde el año 2008 se reconocía el Convenio 169 de la Organización Internacional Del Trabajo (OIT), este se limitó a un cariz culturalista y folclorizante (Aguas y Nahuelpán, 2019), restringido a la institucionalización de acciones como políticas de reconocimiento y dejando de lado cualquier posibilidad de participación deliberativa, especialmente en lo político y en las garantías que permiten consagrar los derechos colectivos de estos grupos diversos.

Como bien sabemos, el proceso en el plebiscito de salida fue rechazado, sin embargo, modificó permanentemente el panorama político del país y cómo se venía entendiendo la democracia, ya que los pueblos indígenas de Chile disputaron una transferencia de la soberanía (Faundes, 2022), mostrando que los acuerdos internos podían levantarse bajo banderas de inclusión y que además, en lo político, existe un gran interés por reflexionar respecto al lugar que ocupan los derechos sociales, económicos y culturales dentro del territorio.

### **Escaños reservados y reconocimiento en la participación política para un nuevo acuerdo nacional**

La incorporación de escaños reservados en procesos de elección popular en Chile para pueblos indígenas fue algo nuevo. Sin embargo, responde a un fenómeno que en América Latina ha sido replicado en países que reconocen su diversidad cultural y étnica. Asimismo, como antecedentes poco a poco han surgido aperturas que buscan legitimar los procesos electorarios, reconociendo, por ejemplo, aspectos como la paridad de género, que pese a ser criticada en el país y no estar exenta de desafíos apunta a una representación igualitaria en

los espacios de poder de diversos actores que logren poner sobre la mesa las necesidades y perspectivas que han sido omitidas de los debates políticos y públicos.

Por esta razón, la convención constitucional representó en Chile la única instancia que, pese a estar mediada por el poder oficial, permitió a la ciudadanía elegir a sus propios representantes para efectos de construir su carta magna. Del mismo modo, fue un intento que buscó hacer partícipes a los sujetos indígenas en la ley suprema que impactaría también sobre sus comunidades, demandas y proyectos de vida.

En cierto sentido, la convención buscaba una amplia participación de la ciudadanía, por lo que la consideración de estos grupos esperaba incluir en el debate a todos los sectores del país o al menos, aquellos entendidos como más representativos para su redacción, lo que no solo permitía la comunicación de demandas, sino también una mayor identificación con los votantes (Padilla, Rodríguez y Espinosa, 2022).

Por ende, los escaños reservados no solo evidenciaron un giro en el reconocimiento político de las etnias de Chile, sino que también cuestionaron la supresión histórica que enfrentaron estos grupos frente a un colonialismo interno, instalando su presencia fuera de los marcos tradicionales que caracterizaban su presencia política en la no participación y participación simbólica (Ramos y Vergara, 2018), permitiendo entonces lograr crear 50 normas explícitas referidas a los ámbitos de interés indígena a lo largo y ancho del país (Convención constitucional, 2022).

### **La propuesta de la convención y el cuestionamiento a las políticas de afirmación**

En el texto propuesto por la convención constitucional del 2022 se reconocían explícitamente los pueblos indígenas y su carácter de nación. Destaca el artículo 5 que aludía: “Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado.” (Convención constitucional, 2022, p. 5).

De acuerdo con esto, la participación indígena proporcionó a representantes de las diversas etnias incidir en la toma de decisiones (Henríquez, 2013), para así delinear en la convención aspectos que desde la opinión pública se decían que estaban siendo trabajados en diversas

instituciones y agendas programáticas, pero representaban para estos grupos un marco de acción restrictivo de sus demandas históricas.

Entre ellos, la participación deliberativa en asuntos que afectan el medio ambiente, la soberanía territorial, los derechos colectivos y su autonomía amparada constitucionalmente, que nunca logró instalarse con la ley indígena ni el convenio 169, cuestión que caracterizaba la cotidianidad de muchas comunidades bajo un estricto control policial y militar (Padilla, Rodríguez y Espinosa, 2022).

Bajo estos términos, traducir estas demandas históricas en principios constitucionales buscaba superar estas barreras y por primera vez integrar sus demandas como lineamientos rectores que consideraban sus particularidades y posibilitan el respaldo político para participar de las decisiones que a sus comunidades les concierne. Del mismo modo, abría paso a un marco jurídico menos restrictivo para pensar su presencia en el territorio desde una consideración real de la autonomía. En definitiva, una oportunidad para imaginar un futuro más allá de la imagen cristalizada bajo la cual eran considerados.

### **Pensar lo indígena en la propuesta constitucional**

Un aspecto fundamental que la propuesta constitucional logró impulsar a través del diálogo y la reflexión fue la importancia del reconocimiento y respeto de los pueblos indígenas desde sus coordenadas ontológicas, epistemológicas, culturales, sociales y políticas. En este sentido, se destacó un elemento que hasta ahora no había sido discutido en el marco jurídico interno de Chile, el cual tiene relación con los derechos colectivos y la posibilidad de ser garantizados en el contexto de las futuras transformaciones políticas e institucionales del país.

Por ende, desde esta perspectiva el sentido de nación fue comprendido de manera similar a lo que advierte De Sousa Santos (2012), que exige el reconocimiento pleno a la pertenencia simbólica y cultural e instalan desafíos en términos de principios que obligan a pensar el nosotros desde la coexistencia, reciprocidad y complementariedad. Lo que abre el debate a nuevos mecanismos para la construcción de lo cotidiano, abierto a la diversidad y el intercambio colectivo.

Por este motivo, los artículos que resumen estas intenciones abordan explícitamente el reconocimiento de la diversidad lingüística y sus usos en los territorios. Ampliar la simbólica cultural nacional dando espacio a los emblemas históricos y ancestrales que caracterizan aspectos como la identidad de los diversos grupos. Fortalecer la materialización y articulación del ordenamiento jurídico interno con los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, instalar y legitimar nuevos modos de asociación, fuera de la orgánica hegemónica y jerárquica bajo la cual en el país se comprende la distribución del poder.

Levantar entonces esta propuesta respondía de manera similar a lo ocurrido en territorios como Ecuador y Bolivia, bajo una premisa que más allá de lo estructural pretendía avanzar hacia condiciones de participación más igualitarias, lo que implicaba una toma de consciencia no solo para estos grupos sino también para la población, ya que aquello que estaba en juego era reconocer aspectos marginados a las tradiciones culturales como verdaderas coordenadas de significación identitaria y subjetiva que estos grupos venían discutiendo hace décadas. Que en palabras de Assies, Van Der Haar y Hoekema, (2002), muestran pensar el Estado-nación como una categoría que se enuncia y conforma desde lo plural y en que los modelos culturales hegemónicos no se superponen ni se erigen desde las asimetrías, un elemento que ha buscado transformar el orden institucional y político y que ha surgido desde las voces de los pueblos y etnias de América Latina.

Sumado a esto, un elemento que históricamente ha sido mencionado en términos de las relaciones interétnicas que caracterizan al país es la discriminación, aspecto que se explicita en este documento, donde lo étnico se articula con otras dimensiones marginadas de su reflexión como el sexo, clase, religión, brindando un papel importante a asuntos como la interseccionalidad en el marco jurídico para comprender procesos de violencia, exclusión e invisibilización, para así construir instrumentos que permitan intervenciones contextualizadas y pertinentes, que exponen lo cotidiano como un plano de experiencias diferenciadas.

En términos institucionales, este proyecto buscaba ofrecer nuevos marcos de entendimiento respecto a la distribución del poder y la autonomía para los grupos indígenas, que tuvieran relación con legitimar sus prácticas de gobernanza e inquietudes sobre la soberanía. Lo que sin duda fue aquello que generó mayor cantidad de conflictos, dado que los sectores políticos

tradicionales aludían a este elemento como posibles fragmentaciones territoriales que afectarían la organización política y administrativa de la nación.

Bajo estas condiciones, el reconocimiento de los pueblos indígenas se traducía en lo oficial como una invitación a delinear el futuro de Chile reconociendo las problemáticas históricas del Estado-nación con las etnias, pero también representaba desafíos en materia de diálogo, puesto que evidentemente era un proyecto y paradigma nuevo que implicaba un arduo trabajo en su construcción. Por este motivo, el papel protagónico de estos escaños reservados abrió tensiones respecto al poder de sus demandas dentro de un marco que tradicionalmente reconocía a la cultura dominante como aquella que organizaba y determinaba las reglas que estos grupos debían asumir.

### **Cultura, Cosmovisión y territorio**

Otro elemento que resultó fundamental en la propuesta constitucional fue el reconocimiento de la cultura indígena como parte importante del patrimonio nacional y también en los procesos de desarrollo local. Destacando, por ejemplo, ampliar la institucionalidad de estos procesos e incorporar en los diversos servicios públicos la mediación intercultural, cuestión que en el presente se ha limitado a algunas instituciones aisladas del país, tales como salud y educación en regiones específicas.

En este contexto, prácticas tradicionales se proponían como aseguradas institucionalmente y sujetas a su regulación para su fortalecimiento, por ello se instalan como principios recuperar rubros propios levantados por las comunidades y que en el panorama actual han sido marginados frente a la industrialización y automatización de procesos, tales como la agricultura tradicional, la pesca, el derecho a la soberanía alimentaria y auto sustento de las comunidades. Bajo esta perspectiva el Estado se concibe como solidario y garante de estos derechos.

Esta visión buscaba entonces superar el modelo subsidiario que caracteriza al Estado de Chile y la crisis de legitimidad que el país enfrentó, donde la política del reconocimiento buscaba materializarse en asegurar un pluralismo legal legítimo (Fuentes y De Cea, 2017), incluyendo en la propuesta incluso artículos específicos sobre el medio ambiente, uso de estos recursos

por parte de las comunidades y su articulación con las cosmovisiones y proyecciones planteadas por estos colectivos. Lo que tenía relación con entender los vínculos de estos grupos con estos territorios más allá de la visión de los recursos naturales y de la explotación, sino como un aspecto inherente a su identidad y raíces.

Por ello, la autonomía fue entendida como la capacidad de organizar sus procesos internos e inicialmente buscaba a través de esta propuesta revitalizar a las comunidades indígenas del territorio, lo cual para ciertos sectores políticos era considerado un privilegio que atentaba contra principios de igualdad, que fue aquello que fundamentó muchas de las discusiones, temores y críticas. Tal como señalan Fernández y Fuentes (2018), los significados de autonomía son disímiles, pero en este caso responden a un elemento común que han demandado grupos marginados, que es la redistribución del poder social y político como alternativa de solución a demandas históricas de participación y representatividad, entendido también como autodeterminación, que en este documento posicionaba a los grupos indígenas en una condición estructural mucho mayor dentro de lo político en la cual nunca habían sido incluidos.

En relación con todos estos puntos, lo indígena buscaba a través de este texto promover nuevas visiones sobre lo humano, lo individual y colectivo, establecer su presencia como un aporte dentro de los diversos espacios de poder y, sobre todo, materializar sus demandas participando de su construcción y seguimiento mediante una representación asegurada. Como aspecto relevante, las cosmovisiones de estos pueblos sin duda aportaban en lo político, simbólico y cultural elementos valiosos para fortalecer los territorios, ya que eran, en cierta medida, una respuesta a las críticas que históricamente se hacían a la centralización que marcaba grandes diferencias en el desarrollo de la capital de Chile y sus regiones. Donde su injerencia apuntaba a que el punto de partida del reconocimiento tenía relación con que diversas visiones de mundo podían coexistir (Riquelme y Samaniego, 2020).

### **Alcances y posibilidades**

Se evidencia en esta propuesta constitucional que los pueblos indígenas son reconocidos como colectivos diversos que, en este caso, integran y se proyectan de manera explícita en diversos espacios de poder negados históricamente. Los aportes de este proceso permitieron



traer al presente demandas que dan cuenta de las transformaciones profundas que las comunidades han sufrido propio de un sistema económico y político que ha marcado grandes diferencias en la ciudadanía y su participación activa. Fue entonces un manifiesto respecto al valor de lo indígena como un sujeto político en los espacios de poder oficial, demostrando su relevancia como interlocutores válidos para incidir en las necesidades que el territorio debía enfrentar tanto en el presente como en el futuro.

Esta propuesta buscó potenciar la identidad y culturas indígenas en el territorio, construyendo una mirada de transformación nacional tanto en lo político, territorial e identitario. De acuerdo con ello, el sufrimiento de la negación, marginación e invisibilización de estos espacios promueve una perspectiva que instala estos desafíos como asuntos que van de la mano de perspectivas de justicia histórica, territorial e institucionalidad. Movilizando lo indígena desde los márgenes hacia el centro. Por lo que las potencialidades de este proyecto iban en la dirección de la revitalización, reconocimiento explícito de procesos de visibilización de demandas indígenas y participación directa de estos grupos organizados.

Un logro relevante de esta propuesta de constitución es su énfasis en los derechos que aluden lo social y cultural, si bien, se reitera la solución vinculada con lo institucional, no niega las demás formas de organización, comúnmente criminalizadas en el panorama presente y que han sido el fundamento para acciones de militarización e intervención en territorios con alta concentración de estas comunidades, específicamente el pueblo mapuche, que en el sur de Chile destaca como el más representativo en número y visibilidad.

Como cuestionamientos a los cuales esta propuesta nos lleva está nuevamente la discusión sobre la identidad, la influencia de lo indígena sigue pensándose desde una perspectiva limitada que probablemente llevó al rechazo de este texto constitucional, ya que el colonialismo interno pudo haber influido en que aquellas personas habilitadas para hacer uso de su poder electoral bajo la consigna de indígena no optarán por participar en la elección de escaños reservados o prefirieran apoyar a grupos amparados de manera directa o indirecta por los partidos y coaliciones políticas tradicionales, solo participando un 22, 81 % de la población indígena habilitada (El Mostrador, 2021), lo que invita nuevamente a profundizar sobre qué y cómo entendemos la democracia y representatividad.

Porque, en definitiva, el panorama político de Chile se ha destacado por estar limitado a la institucionalidad, de modo que queda mucho trabajo por hacer respecto a la legitimidad que adquieren los movimientos de grupos que emergen desde las propias bases y colectivos ciudadanos.

Este proceso entonces plantea como necesario asumir las transformaciones que ha experimentado la democracia y cómo se levantan proceso de elección popular, disputas que requieren seguir reflexionando sobre la comprensión que en lo político gira en torno a aspectos como los privilegios, deudas históricas e interseccionalidad. Tal como señala González (2006), el reclamo está por avanzar de lo individual a lo colectivo, siempre en un marco donde la relación entre Estado y colectividades indígenas ha estado debilitado, pero que apuntan a que la participación requiere de prácticas donde el poder social adquiere espacios de deliberación.

Por ende, los desafíos que surgen a raíz de la irrupción de lo indígena en procesos como el levantamiento de una nueva constitución son innegables, si bien, es un paso más para reconocer que los derechos y participación de estos grupos son una pregunta que necesita mucho más debate, los obstáculos y barreras siguen latentes. En términos de esta ponencia, los artículos nos llevan a discutir en lo político y de modo consensuado qué implica “lo indígena” para nuestro país, proyecciones y necesidades, ya que esta diversidad cultural y étnica presenta que el proyecto de la nación requiere de una reflexión que apunte a la heterogeneidad, que el concepto cerrado de lo nacional se ha agotado en términos de la cercanía de la ciudadanía con lo político y que estas rutas sugieren alternativas efectivas para garantizar la equidad y participación significativa en la toma de decisiones.

Por lo tanto, el diálogo es un elemento que no podemos olvidar y que independiente de los resultados de estos procesos, la política y las instituciones requieren de adaptaciones que garanticen la inclusión justa de todos los ciudadanos asegurando sus posibilidades de ser y sentirse representados en la vida política y social del país. Donde como advierte Guendel (2011), lo intercultural se erige como una dimensión donde el reconocimiento de derechos y el debate se orienta a la incorporación de los aportes colectivos que valoran el potencial del intercambio cultural y el diálogo permanente.

La valoración de nuestros orígenes, etnias de los territorios y políticas que aseguren su plena participación en igualdad de condiciones no solo representa un desafío que ha sido objeto de reflexión en diversos países de la región, sino que también responde a una reparación histórica que estas comunidades merecen y debemos seguir pensando, logrando con ello superar las tensiones históricas que siguen latentes en las memorias ancestrales y que nos lleven a nombrarnos desde ese universo colectivo que habitamos y no hemos podido reconocer del todo.

### **Reflexiones finales**

Para finalizar, pese a que el proyecto por un nuevo acuerdo nacional constitucional para Chile bajo estas condiciones no prosperó y donde hasta hoy, el asunto indígena es un debate que no ha querido ser nuevamente puesto sobre la mesa dentro del marco político oficial, la inclusión de escaños reservados para pueblos originarios significó un avance en materia de reconocer la dimensión política de estas colectividades, dado que su omisión histórica sin duda constituyó una vulneración de la cual todavía tenemos que buscar medidas de reparación.

De igual modo, la presencia de representantes de los pueblos indígenas permitió discutir temas claves que a nivel país no nos estábamos haciendo cargo y bajo las leyes actuales resultaban avances insuficientes, entre ellos la consideración de la autonomía de estos grupos como posible, el valor de la diversidad simbólica, cultural de todas estas naciones y su necesidad de ser reconocidos como interlocutores válidos en la toma de decisiones sobre las situaciones que les afectan directamente. Desde esta perspectiva, la propuesta constitucional y los aportes de los escaños reservados permitían pensar un futuro en lo plural, donde nuevos valores y principios como la coexistencia, reciprocidad y diálogo serían aquellos que orientarán lo político y sus manifestaciones.

Por otro lado, la situación de los escaños reservados muestra nuevas estrategias que han surgido en nuestros territorios para comprender la democracia, incluyendo procesos que apuntan a una mayor representatividad. Si bien es cierto, el camino seguido por Chile no es la única ruta para dar solución a este problema, pone en discusión privilegios y deudas históricas que cruzan la historia de muchos grupos indígenas en América Latina y cómo están

levantando alternativas desde el sur. Dado que esta ponencia se limita al caso chileno, resulta interesante también cómo este ejemplo muestra un proyecto político “otro”, que nos invita a revisar experiencias de cambio y transformación impulsadas por el reclamo, la crítica y el malestar ciudadano.

En síntesis, el proceso constitucional del 2022 representó un paso significativo hacia la construcción de un proyecto político más inclusivo y diverso, donde las cosmovisiones, diversidad cultural y nuestras raíces cobraban importancia en términos de la cotidianidad, hacia lo que se entiende como un reconocimiento pleno. A pesar de que esta propuesta fuera rechazada, el lugar que ocupó lo indígena sigue siendo objeto de debate en lo institucional, en las últimas elecciones se reconoce el derecho a votar como parte de estos pueblos y probablemente los actuales poderes del Estado avanzarán hacia debates donde el asunto nuevamente deba ser tratado. Junto con esto, la sociedad civil, organizaciones, activismos reconocen su presencia en la esfera pública y aportaciones, por lo que pese a las tensiones culturales e históricas que acompañan esta situación, lo que muestra aperturas hacia la interculturalidad como un objeto constante en construcción y transformación.

## Referencias

- Acevedo, Carolina. (2021) «Inclusión de derechos indígenas en Chile: arquetipo constituyente desde América Latina», *Polis (Santiago)*, 20(58). Disponible en: <https://doi.org/10.32735/s0718-6568/2021-n58-1576>.
- Aguas, Javier. y Nahuelpán, Héctor. (2018) «Estrategias discursivas de las instituciones públicas en la web: nuevas formas de comunicar las políticas públicas», *Cultura-hombre-sociedad*, 28(2), p. 41. Disponible en: <https://doi.org/10.7770/0719-2789.2018.cuhso.04.a01>.
- Assies, Willem., Van Der Haar, Gemma. y Hoekema, André. (2002) «Los pueblos indígenas y la reforma del Estado en América Latina», *Papeles De Poblacion*, 8(31), pp. 95-115. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/112/11203104.pdf>.
- Convención constitucional (2022) *Propuesta de Constitución Política de la República de Chile*, *Chileconvención.cl*. Santiago de Chile.

- De Sousa Santos, Boaventura (2012) «Cuando los excluidos tienen Derecho: justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad», en B. De Sousa Santos y A. Grijalva (eds) *Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Ecuador*. 1.<sup>a</sup> edn. Fundación Rosa Luxemburg/AbyaYala.
- El Mostrador. (2023) «Participación indígena: 22,81% del padrón votó escaños reservados para pueblos originarios», *El Mostrador*, 7 abril. Disponible en: <https://www.elmostrador.cl/dia/2021/05/17/participacion-indigena-2281-del-padron-voto-escaños-reservados-para-pueblos-originarios/>.
- Faundes, Juan. (2022) «Claves del proceso constituyente chileno (2019-2022), a la luz de la participación política de los pueblos indígenas», *CUHSO Temuco*, 32(2), pp. 216-234. Disponible en: <https://doi.org/10.7770/cuhso-v32n2-art2927>.
- Fernández, Juan. y Fuentes, Claudio. (2018) «Percepciones sociales sobre el derecho de autonomía de los pueblos indígenas en Chile», *Polis (santiago)* [Preprint]. Disponible en: <https://doi.org/10.4067/s0718-65682018000100029>.
- Fuentes, Claudio. y De Cea, Maite. (2017) «Reconocimiento débil: derechos de pueblos indígenas en Chile», *Perfiles Latinoamericanos*, 25(49), pp. 55-75. Disponible en: <https://doi.org/10.18504/pl2549-003-2017>.
- González, Nila. (2006) «Ciudadanía activa: La construcción del nuevo sujeto indígena», *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, 22(49), pp. 9-24. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2476948.pdf>.
- Guendel, Ludwig., (2011), "Política social e interculturalidad: Un aporte para el cambio (Ensayo)." Ajayu. Órgano de Difusión Científica del Departamento de Psicología de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo", Vol., núm.1, pp.1-52. Disponible en : <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=461545463001>

Henríquez, Alfonso. (2013) «Participación indígena: desarrollo y alcances en torno a la participación ambiental», *Ius Et Praxis*, 19(2), pp. 251-300. Disponible en: <https://doi.org/10.4067/s0718-00122013000200008>.

Jiménez-Yañez, César. (2020) «#Chiledespertó: Causas del estallido social en Chile», *Revista Mexicana de Sociología*, 82(4), pp. 949-957. Disponible en: <https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2020.4.59213>.

Padilla, Geraldo, Rodríguez, Carlos y Espinosa, Denisse. (2022) «Análisis territorial de la participación electoral mapuche en la elección de constituyentes». *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 10(3), e29. Epub 01 de diciembre de 2022. Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2308-01322022000300029&lng=es&tlng=es](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322022000300029&lng=es&tlng=es).

Ramos, Yolanda. y Vergara, Martha. (2018) «Participación indígena en política pública: el caso del pueblo mapuche», *Papel Político*, 23(1), pp. 1-28. Disponible en: <https://doi.org/10.11144/javeriana.papo23-1.pipp>.

Riquelme, Catalina. y Samaniego, Sastre. (2020) «Pueblos indígenas. Reconocimiento y tensiones político-normativas al interior del espacio público en Chile, 1990-2010», *Estudios Políticos*, (59), pp. 46-73. Disponible en: <https://doi.org/10.17533/udea.espo.n59a03>.